



# PATRIA Y PUEBLO

SOCIALISTAS DE LA IZQUIERDA NACIONAL



**QUE NO CAIGA SOLO**

LA OLIGARQUÍA, LAS EMPRESAS IMPERIALISTAS  
Y LOS BANCOS NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES

## EL ESTÁBLISHMENT, A VIDA O MUERTE POR LA POSTPANDEMIA

por nestor gorjovsky

La operadora periodística Silvia Mercado definió muy claramente lo que piensa el bloque antinacional sobre el gobierno de Alberto Fernández cuando aseguró, en un tuit, que aceptaría la larga cuarentena impuesta desde el 20 de marzo de 2020 si hubiera 20.000 muertes por Covid (sic), y no los centenares que había en ese momento.

### Muertos y estafados

Aunque al momento de cerrar esta nota la Argentina ya ha superado el millar de muertos, muy lejos estamos de satisfacer a la necrófila “periodista”... y en el AMBA, la cuarentena sigue e incluso -tras largas vueltas del gobierno del Pro en la CABA- se refuerza al máximo!

El “argumento” -que lejos estuvo de ser el único en ese sentido, pero merece tratamiento especial por la sintética rudeza de la Sra. Mercado- carece de todo sentido. Tanto le hubiera valido a la empleada del grupo Infobae reclamar que se retiren todas las barandas de los balcones hasta que, después de contabilizar cien mil muertos por caídas al vacío, se hiciera necesario ponerlas de vuelta.

Pero ni las vidas (ajenas) ni la lógica formal interesan a los voceros del interés oligárquico. Veámoslo desde el ángulo complementario:

Según nos han informado hoy, el presidente de CARTEZ y de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, aseguró esta semana en un reportaje radial que la defraudación perpetrada por el directorio de Vicentín no constituye delito alguno, ya que estaría en las reglas del capitalismo ganar y perder. Y si no has sabido evitar que te estafen, te toca pagar por ello.

### Un Estado bobo y cruel

Según este importantísimo dirigente ruralista, el Estado no solamente no debería intervenir (mucho menos expropiar) el grupo Vicentín. Debería permitir además que los actores económicos se defrauden mutuamente en completa libertad, sin castigar las acciones delictivas que hayan cometido.

Que algunos de esos actores sean bancos oficiales, es decir, del mismísimo Estado, y que esos bancos hayan estado en manos de personeros de la empresa que los Vicentín vaciaron, se le escapa por completo al Sr.



Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en la caravana contra la expropiación de Vicentín.

Rotondo. El Estado, para él, solamente existe para tomarlo por asalto, poner amigos a dirigirlo, enriquecerse a su costa y correr luego con los gastos decurrentes (sin, por supuesto, ni siquiera atreverse a cobrarle impuestos a los que acaban de estafarlo).

Este absurdo de eliminar al Estado por completo de las relaciones entre ciudadanos privados es de la misma magnitud que el de la Sra. Mercado. Y, sin embargo, un principalísimo directivo de instituciones representativas del gran capital agrario no siente la menor vergüenza en emitirlo en público.

### Obligado

A decir verdad, como lo expresó en su blog el economista y político Eric Calcagno, “el Estado siempre interviene, siempre está. El asunto es saber a favor de quién: hubo un Estado que engendró al Cártel del Paraná, por donde se va la riqueza nacional... con poco o ningún control de lo que sale (o lo que entra). Gracias a Vicentín podemos debatir el modelo de Estado que deseamos. Otra vez en nuestra historia, la cuestión de los puertos vuelve a ser central.”<sup>1</sup>

Esta última afirmación de Calcagno da en el centro de lo que está, realmente, en debate: estamos ante un nuevo Obligado.

### El Estado policíaco y el saqueo a la Nación

Nadie definió mejor la forma que asumió el Estado macrista que Artemio López, en un tweet del 28 de junio de 2020. Para el sociólogo peronista, se trató de “un Estado policial ampliado con tres patas (política, judicial y mediática) orientado al endeudamiento externo, la especulación financiera y la persecución de opositores”.

Quienes convirtieron en eso al Estado, para los fines que definen López y Calcagno, suscriben por completo las declaraciones de Rotondo y Mercado: es un Credo salvaje que no reconoce mediaciones entre la vida (propia) y la muerte (ajena).

Y desde el instante mismo en que perdieron las elecciones de 2019 han lanzado una ofensiva feroz, un asalto sin límites contra la Casa Rosada. De hecho, el vaciamiento de Vicentín forma parte de esa ofensiva. Martín Tetaz, uno de sus voceros de cabecera, asegura sin ponerse colorado por el canal LN+ (y otros medios) que ese vaciamiento es la consecuencia lógica del rechazo del pueblo argentino a la reelección de Mauricio Macri.

Ese asalto explica cualquier ataque. No importa tener razón, ser coherente, seguir alguna lógica discernible: importa desgastar a un gobierno que optó por defender la vida de sus gobernados, al precio que sea, y movilizándolo para ello todos los recursos posibles. Y colocando al Estado en el centro mismo de esa defensa.

## Histeria oligárquica

De ahí la defensa de la muerte que hace Mercado, de ahí el anarquismo selvático de Rotondo, de ahí la indefendible reflexión de Tetaz.

El bloque oligárquico percibe que hay un gobierno que pretende defender la vida de los argentinos utilizando las herramientas de que dispone el Estado, y sabe que su proyecto exige que el Estado se retire para eliminar la población sobrante en su mezquina ambición de retornar a los buenos tiempos... ¿anteriores a Perón? No. Anteriores a la Ley Sáenz Peña y a Hipólito Yrigoyen.

Percibe que si el gobierno mantiene los niveles de popularidad que alcanzó por su manejo de la pandemia, no habrá modo de derrotarlo en las parlamentarias de 2021 y, por lo tanto, de impedir que sea reelecto en 2023. Y eso es demasiado para su intención retrogradante.

Por lo tanto, se lanza al ataque más furioso posible, para imponer las condiciones de la salida de la peste.

*¿Cómo será que “nada será como antes”?*

La crisis económica mundial desatada por la pandemia viral arribó a un país saqueado y llevado al borde de la ruina por el régimen oligárquico e imperialista presidido por Mauricio Macri. Esto impone un dramatismo excepcional a la convicción global generalizada de que una vez que se encuentre remedio y vacuna contra el Sars-Cov-2 y se puedan levantar las medidas de excepción que impone la salud pública “nada será como antes”.

Porque hay varios modos de “no ser como antes”.

En algunos países, incluso, las cosas pueden llegar a ser bastante parecidas a lo que eran antes. La República Popular China, por ejemplo, solamente hará los ajustes necesarios para adaptarse a un mercado mundial en el que su posición se modificará de un

modo no desdeñable: EEUU intentará liberarse de la dependencia que llegó a tener de ella retornando a cierto proteccionismo industrial y profundizando la agresión que se suele banalizar como “guerra comercial”; por lo tanto, el gobierno chino fortalecerá la apuesta al mercado interno que ya había empezado a practicar con la crisis de 2008; al mismo tiempo, la Federación Rusa fortalecerá sus vínculos con el gigante asiático y no puede descartarse que se convierta en el nexos comercial con una Europa abandonada a su suerte por Washington (¿y Londres?). Es decir, no habrá demasiados cambios y de hecho Beijing presentará cifras positivas, aunque bajas, en la evolución de su PBI durante el resto de 2020.

En la Argentina, la situación es la opuesta. No hay neutralidad posible sobre el escenario post-pandémico. Como bien resumió Enrique Lacolla en su blog Perspectivas, nadie es más conciente que el bloque antinacional de que “o Argentina rompe con la fijación del sistema económico-mediático-judicial que la paraliza, o retrogradará hacia un largo período de desorden, anomia y expulsión a la periferia de la tercera parte o más de su población.” Al país, asegura el periodista cordobés, “sólo le queda renovarse o zozobrar”.<sup>2</sup>

## Los riesgos del establishment

El establishment aprovechó el Cuatrienio Abjecto para destrozarse las finanzas públicas, llevar al borde de la muerte a la pequeña y mediana industria, e imponer un retroceso técnico, científico y social que culminó en la reducción de los ministerios de Salud, Trabajo, Ciencia y Técnica y Cultura a meras secretarías de Estado. Así es que su división mediática no repara en medios, ni en absurdos, para atacar al gobierno recién llegado y ya abocado a proteger las vidas contra el virus exógeno.

Desde adentro mismo del país, despojados del poder del Estado (que, dicho sea de paso, destro-

**PARTIDO PATRIA Y PUEBLO - SOCIALISTAS DE LA IZQUIERDA NACIONAL** 



Sede Central: Bolívar 1511 - CABA - Argentina

**Chubut - Córdoba - Santiago del Estero - Tierra del Fuego - Corrientes**



zaron como termitas en una casa de madera), pero dueños de buena parte del poder real de la Argentina, entienden que corre grave riesgo no solamente lo que avanzaron bajo Macri sino más de uno de sus seculares privilegios (que, cínicamente, quieren hacer pasar por “derechos adquiridos”). No temen ni siquiera el riesgo de un no imposible caos que, creen, las favorecerá.

En este contexto, las convocatorias a quebrar la cuarentena (sabiamente manejadas, por otra parte, en el discurso del miedo que hizo el Presidente de la Nación al presentar la nueva extensión del cierre en el AMBA), la burla a las leyes o decretos protectores del empleo, e incluso (por supuesto) el permanente intento de crear una crisis cambiaria o una hiperinflación no son más que escaramuzas cuyo objetivo inicial es erosionar al gobierno nacional.

Pero en segundo lugar, intentan probar hasta dónde la natural tendencia del abogado Alberto Fernández a la negociación, la concertación de intereses y el respeto estricto de la ley servirán, o no, a su práctica destituyente.

### **Una reforma patronal es cuestión de vida o muerte**

En todo este ataque juega un rol aparte, equiparable al del “partido militar” posterior a 1955, el alto comando del Poder Judicial. Cada día que pasa se revela más insuficiente la autolimitación que está mostrando Alberto Fernández en el trabajo de apartar de la administración de justicia a la carroña procesista que se mantiene en ella desde que, en 1983, el alfonsinismo orientó la lucha contra la herencia del régimen de Martínez de Hoz casi exclusivamente contra los subordinados del títere Videla.

Ya es hora de entender que los uniformados fueron sicarios, y los verdaderos genocidas, civiles.

La pandemia puede dejarnos una institución presidencial fortalecida en la consideración pública. Ya está sirviendo para reconciliar al Ejército con el pueblo. Seguramente su levantamiento será oportunidad de revitalizar reivindicaciones del movimiento obrero que un gobierno interesado en la expansión del mercado interno en medio de un planeta que tiende a retornar al proteccionismo no puede sino aprovechar. Es el momento de forzar al empresariado a practicar la única reforma que se niega a llevar a cabo.

Según anotó Mónica Peralta Ramos en El cohete a la luna del domingo 28 de junio, “el caso Vicentín ... apunta a un futuro no muy lejano donde el Estado tendrá que intervenir para salvar empresas en lugares estratégicos. Ya hay dos casos que, por diferentes motivos, se acercan a ese desenlace: Sancor y Molino Cañuelas ... de vital importancia para la industria de la alimentación.”<sup>3</sup>

Es la hora de la reforma patronal. La pandemia que azota al mundo entero la ha convertido en cuestión de vida o muerte. Nadie lo sabe mejor que Silvia Mercado. Sepámoslo nosotros también y actuemos en consecuencia.

---

<sup>1</sup> <https://bit.ly/3dR5B5S>

<sup>2</sup> <https://bit.ly/3gajTzN>

<sup>3</sup> <https://bit.ly/31t41Ex>



## AMPLIO CONSENSO EN EL MOVIMIENTO OBRERO PARA EL RESCATE Y LA ARGENTINIZACIÓN DE VICENTIN

por juan maria escobar

El diario La Nación en su edición del 9 de junio tomaba nota del masivo respaldo de las centrales de trabajadores a la intervención de la empresa Vicentin. Con el reconocimiento de que el hecho se producía dejando de lado “históricas diferencias sindicales”, aunque esto fuera (suponemos que esperan que sea así) “de manera fugaz” pasaban revista por algunas de las expresiones públicas de reconocidos dirigentes gremiales.

Entre otras se señalaban las de **Héctor Daer**, que se expresó por las redes sociales y felicitó al presidente Alberto Fernández por la decisión, de **Daniel Yofra**, de la Federación de Aceiteros con actuación en el polo agroexportador de Rosario, ambas CTA, la de los Trabajadores por medio de **Hugo Yasky** y

la CTA Autónoma, a través de **Hugo Godoy**.

Incluso se sumó Ramón Ayala, un viejo aliado de Mauricio Macri que lidera el gremio de los trabajadores rurales de Uatre. “De esta forma se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores que veían peligrar su fuente de trabajo y asegura el funcionamiento de esta estratégica empresa en un amplio sector de nuestra economía”, dijo el sucesor de Gerónimo Venegas.

La **Corriente Federal** también se expresó a través de un comunicado: “Vicentin debe ser expropiada porque además de significar el salvataje de una empresa estratégica para el interés nacional y salvaguardar miles de puestos de trabajo, es un paso también a la soberanía alimentaria”.



La manifestación colectiva más contundente fue la solicitada publicada en los principales diarios nacionales el día 18 de junio firmada por los principales dirigentes del **Concejo Directivo de la CGT, de la CTA de los Trabajadores y de la Autónoma, de la Corriente Federal de Trabajadores, de la UTEP** y otras vertientes gremiales, adhiriendo una larga lista de dirigentes que manifestó su **“respaldo a la decisión adoptada por el presidente Alberto Fernández de proceder a la intervención del Grupo Vicentin y abrir la vía judicial y legislativa para evitar el vaciamiento de esta empresa”**.

Los argumentos para expresar el apoyo a la medida del Gobierno son los siguientes:

- Garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo y de los salarios de más de 6000 trabajadores que dependen del grupo y de aproximadamente 20.000 que de manera indirecta dependen del mismo.
- No se puede aceptar que como consecuencia de la irresponsabilidad de un puñado de depredadores, quede un tendal de miles de pequeños productores agropecuarios en situación de quebranto.
- El Grupo Vicentin recibió durante el gobierno de la Alianza Cambiemos 18.000 millones de pesos, es el caso testigo de esa delincuencia de guante blanco con la que se debe terminar.
- Porque se trata una empresa que por ocupar un lugar estratégico en la producción de alimentos en una etapa crítica como la que hoy estamos afrontando, debe ser rescatada y preservada del proceso de concentración y extranjerización.

El accionar del gobierno nacional con el apoyo manifestado por el conjunto del movimiento sindical argentino responde positivamente a lo solicitado por los trabajadores directamente afectados por el accionar fraudulento de la empresa que el 4 de diciembre del año pasado se declaró en convocatoria de acreedores. En la ciudad santafecina de San Lorenzo el secretario general del Sindicato de Aceiteros (SOEA) **Pablo Reguera** solicitaba el 20 de enero “que se protejan y conserven los puestos de trabajo que desde hace más de un mes se encuentran en riesgo por la aventura financiera de los dueños de Vicentin que pone en vilo a los trabajadores directos e indirectos, afectando ingresos y puestos laborales tanto en la empresa como fuera de ellas, arrastrando en su desidia a muchos de los actores sociales que conforman la sociedad de nuestra región”.

Conocida la decisión del Gobierno Nacional de salvar la empresa, los compañeros del SOEA celebraban la decisión de intervenir la compañía ya que la misma “nos brinda la tranquilidad de que las decisiones a tomar estarán orientadas a volver a integrar a Vicentin con la próspera cadena de aprovisionamiento de cereales”.

Finalmente expresaban: “Es una oportunidad para que los trabajadores de San Lorenzo sigamos realizando nuestro aporte por un país con mayor soberanía alimentaria y sobre todo, con un rol más protagonista en una actividad clave para la exportación y el desarrollo nacional”.

## VICENTIN: UNA MADEJA CON VARIAS PUNTAS

por antonio diez



La empresa se declaró en cesación de pagos, y llamó a convocatoria de acreedores, y ahí se desató la madeja. Principales acreedores los bancos oficiales (Nación, Provincia, BICE, Ciudad). Nada novedoso; siempre en estas empresas fallidas cuando se ponen las cartas sobre la mesa nos encontramos con los mismos patrones de conducta de los “empresarios”. O sea endeudarse con bancos públicos y tirarle el fardo a los fondos de todos nosotros. Ya lo hemos visto en casos emblemáticos como el Hotel Bauen o aquí en Mar del Plata con la empresa láctea “El Amanecer”, ambas empresas recuperadas por sus trabajadores y puestas en marcha sin mayores sobresaltos.

Pero lo de Vicentin es mucho más complicado y peligroso (para algunos). Aparte de dejar al desnudo el “modus operandi” de gran parte de las grandes exportadoras de granos, deja al desnudo el “modus operandi” de gran parte del empresariado argentino. Endeudarse con bancos oficiales, (curiosamente los grandes defensores de lo privado, no se endeudan con bancos privados, ¿será porque éstos, como son de la misma tribu, les conocen las mañas?).

El gobierno, en defensa de los intereses del Estado, interviene la fallida con vistas a propiciar una expropiación, ya que gran parte del dinero necesario para tal medida ya fue entregado a la empresa a través de los créditos impagos.

## Sobre el autor:

El segundo grupo de acreedores en orden de importancia son los proveedores de materias primas para la empresa, o sea los agricultores. Por una parte a través de sus Cooperativas de primer y segundo grado, acopiadores, y por otra parte, productores clientes individuales. Cooperativas de Servicios Públicos (Energía Eléctrica, Agua, etc.) también caen en la volteada.

Y se empieza a enredar la madeja. Porque entre los productores individuales y acopiadores hay seguramente acreedores que no pueden presentarse en ninguna parte, porque han entregado mercadería en negro. Aquí caen pools de siembra y grandes productores para quienes la única esperanza de cobrar consiste en que la empresa siga conducida por los mismos que la vinieran gestionando, y que el Estado le de los fondos necesarios. Esa fue la “alternativa” que los Ceo’s de la empresa le llevaron al Presidente, al parecer sin tomar nota que ya no es Macri el Presidente...

Con sus vasos comunicantes con los poderes fácticos, se han puesto en movimiento, tratando de movilizar en pos de una 125 rediviva, hipótesis bastante difícil de implementar dado que el grueso de los movilizados de 2008, agrupados en FAA y CONINAGRO, son damnificados por una estafa concreta, y no alcanzo a entender como alguien se movilice en defensa de quienes los han estafado.

O sea que la recomposición de aquella “Mesa de Enlace” de 2008 es a mi entender solo una quimera. Vicentin no ha dejado lugar de la Pampa Húmeda y zonas anexadas por la mega-agricultura sin estafar a alguien. Solo basta ver el mapa de acreedores confeccionado por un periodista rosarino para tener una idea de los conflictos que se pueden dar al tratar de juntar el agua con el aceite, sobre todo en tantos lugares de medianas poblaciones, donde todos se conocen vida y milagros...

No quiero imaginar las consecuencias que puede traer si la intervención se encuentra con una doble contabilidad cuando concilie las existencias con las entradas y salidas de mercadería, porque en alguna parte debe estar asentado cuanto se le debe a los que entregaron en negro. Y por detrás venga la AFIP a recorrer uno por uno a esos productores.

En fin, que el esquema del agronegocio comienza a transitar un camino muy resbaladizo.

Antonio Diez nació en Tres Arroyos en 1942. Actuó en las Juventudes Agrarias Cooperativistas, ocupó la Secretaría de la Regional Sudeste de CONINAGRO y la Vicepresidencia del Consejo de Administración del Banco Coopesur. Fue socio fundador de la Asociación de Contratistas Rurales de Tres Arroyos, entidad gremial a la que estuvo ligado a la actividad agrícola como productor y contratista durante más de 35 años. Incursionó en la Docencia Técnica en la especialidad de Mecánica de Maquinaria Agrícola en la ENET N°1 de Tres Arroyos, cuando existió la carrera de Técnico Mecánico Rural. Militó en la Unión Cívica Radical Intransigente y luego en el Partido Intransigente. Actualmente está radicado en Mar del Plata, donde ha incursionado en el periodismo radial y desde hace siete años es columnista en el Programa “Voces Cooperativas” que se emite por Radio Brisas.

# Los Mitristas del Mes



## the vicentin boys

por federico quevedo

La sinécdoque es aquella figura retórica que consiste, a grandes rasgos, en designar a la parte por el todo. Así, por ejemplo, decimos que tal sujeto atraviesa sus 50 primaveras para referirnos a sus 50 años, o que la división de un gasto arroja x cantidad de pesos “por cabeza”, queriendo significar “por persona”.

Las reacciones de diversos actores políticos y económicos ante el anuncio hecho por el Gobierno nacional en relación a la posibilidad de estatizar a la empresa Vicentin funcionó entonces de ese modo, ya que, a través de un caso particular, pudimos advertir cómo operan sistemas de pensamiento mucho más amplios y complejos.

Vicentin fue partícipe de una estafa contra el Esta-

do argentino. En efecto, el endeudamiento de esta firma con el Banco Nación se duplicó entre 2015 y 2019, pasando de US\$ 150 millones a más de US\$ 300 millones. Pero a eso debemos añadir dos cuestiones: 1) la mayor parte de los créditos fueron otorgados en el último año del gobierno de Mauricio Macri; 2) sólo en noviembre —es decir, cuando el Frente de Todos ya se había impuesto sobre el oficialismo de entonces en las elecciones generales— Vicentin recibió US\$ 86,6 millones en créditos para prefinanciación de exportaciones, a razón de casi uno por día<sup>1</sup>.

A priori, la cúpula de la empresa y el directorio del Banco de la Nación argentina deberían estar dando más que una explicación. No obstante lo cual, han recibido ciertos apoyos. La alianza Juntos por el



Cambio se opuso a la estatización aduciendo que se trataba de una medida “innecesaria y peligrosa”; en la misma línea se pronunció la Sociedad Rural Argentina, enfatizando que la intervención del Estado en la economía siempre “ha creado severas distorsiones”; el diario La Nación aseguró a través del plumífero Joaquín Morales Solá que se trataba de “un manotazo del Estado a la actividad privada”<sup>2</sup> y el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini restituyó al fraudulento directorio de la empresa tras la intervención dispuesta por el Gobierno nacional.

¿Qué tiene en común este variopinto frente opositor? Muchas cosas. En primer término, la plena conciencia de que el avance del Estado sobre un sector estratégico en términos de comercio exterior y aporte de divisas al fisco representaría para ellos una derrota política que no están dispuestos a permitir. Contrariamente a lo que dicen en público, entienden perfectamente que las nacionalizaciones emprendidas en los últimos 15 años no fueron un fracaso, sino que mostraron que el sector público puede administrar ramas centrales de la economía de manera eficiente y en beneficio del pueblo. Así lo demuestran los casos de AYSA, Aerolíneas Argentinas, las AFJP o YPF, por citar algunos.

Por otro lado, los unifica la certeza de que, producto de la debacle económica que se está experimentando a nivel planetario y del consiguiente deterioro del empleo, en el mundo de la pospandemia los Estados deberán hacerse cargo de garantizar todos aquellos derechos y bienes esenciales que el mercado no estará en condiciones de otorgar. El acceso a la vivienda, la comida, la energía y la vestimenta

para toda la población requerirá de una reaparición de la planificación económica si se quiere evitar un genocidio de magnitudes universales. Ante este panorama, el frente antinacional descrito apuesta a debilitar al Estado argentino para poder así negociar en mejores condiciones el reparto de las cargas que implicará la salida del actual Estado de situación. O, como suele decirse, quién pagará la reconstrucción.

A tal punto ese bloque antipopular es consciente de lo que está en juego, que no sólo apostó fuerte para evitar la intervención de Vicentin –llegando a motorizar protestas civiles y movilizaciones contra la medida- sino que, en la misma línea, ha logrado retardar el debate sobre el impuesto excepcional a las grandes fortunas.

Lamentablemente, del lado del Gobierno la fe en el poder del Estado no parece estar tan arraigada. Asistimos a un curioso caso en el que los grandes actores económicos y sus representantes tienen mayores expectativas en el rol del Estado como administrador económico que el propio Estado.

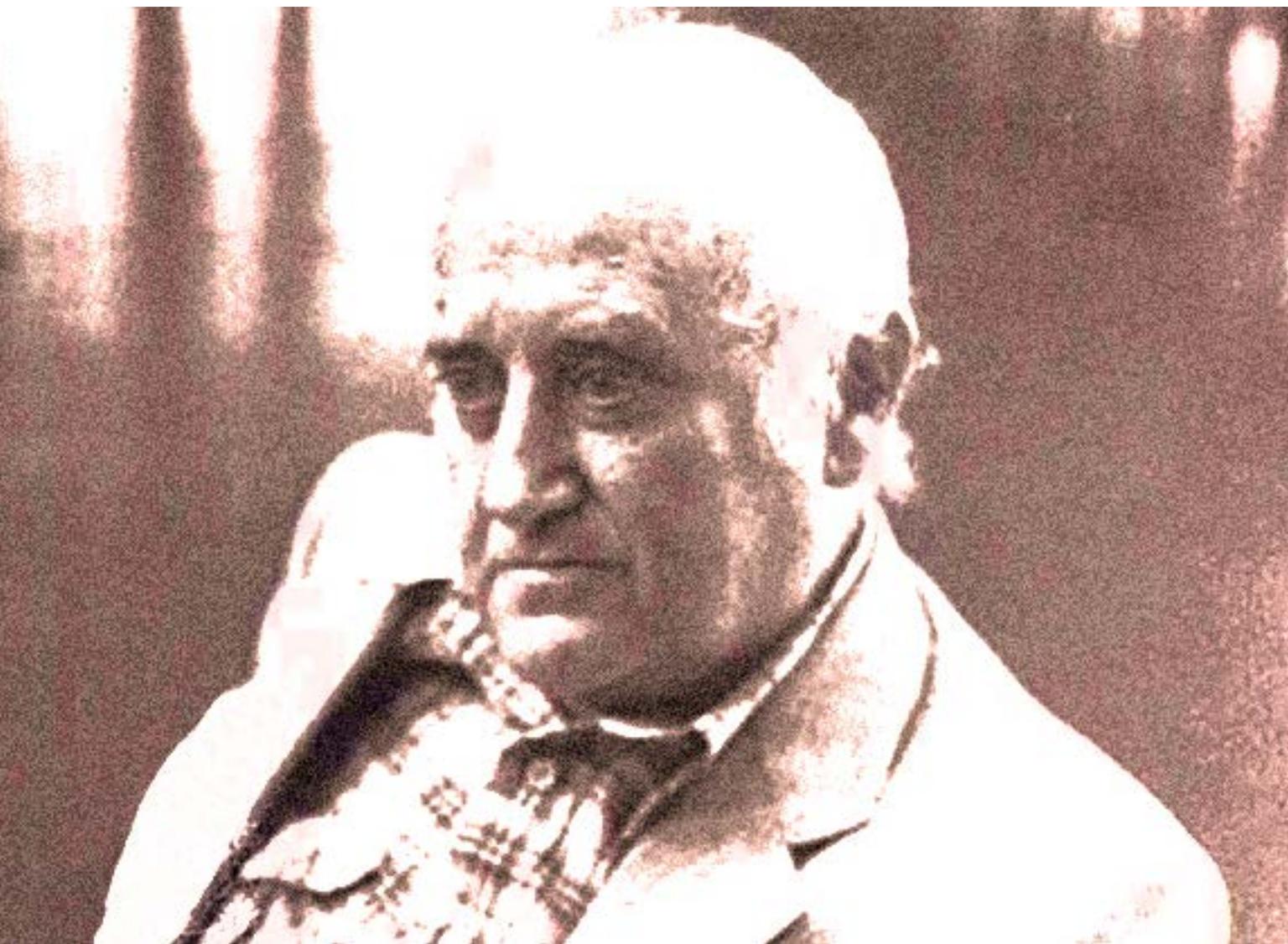
En ese escenario, el alineamiento inmediato de este bloque en defensa de la empresa estafadora y evasora debería funcionar como alerta para advertir la necesidad de fortalecer al campo nacional/popular de cada a los próximos e inminentes desafíos.

---

<sup>1</sup> <https://bit.ly/31te7Fr>

<sup>2</sup> <https://bit.ly/38douOS>

# CLÁSICOS



## VICENTIN A LA LUZ DE CLASE OBRERA Y PODER

por martin gorjovsky

Al igual que el conflicto por la aprobación de la Resolución 125 en 2008, la decisión del gobierno nacional de intervenir en la quiebra de la cerealera Vicentin pone en el centro de la discusión política la cuestión acerca del esquema semicolonial agrario diseñado por la oligarquía argentina hace más de un siglo, y cómo las características esenciales del mismo siguen vigentes después de tanto tiempo.

Desde el Socialismo de la Izquierda Nacional, Jorge Enea Spilimbergo sintetizó la especificidad de la semicolonía argentina en las tesis políticas tituladas “Clase obrera y poder”, escritas en 1964.

En ellas, Spilimbergo plantea que “La oligarquía terrateniente, como clase dominante, constituyó su propio aparato político, administrativo y cultural, presentándolo como expresión del país en general,



e influyendo en alto grado sobre el conjunto de las clases sometidas. Esta influencia gravitó especialmente sobre las clases de la plataforma librecambista del litoral agro-portuario (pequeña burguesía urbana y chacarera, pequeños y medianos ganaderos, proletariado marginal, etcétera). Exclusión hecha de los peones, este sistema de clases populares tenía una posición dual ante la oligarquía gobernante; discutía su monopolio del poder político y los excedentes netos; pero coincidía con ella en apoyar el programa librecambista de la semicolonía agraria. Ignorante del país en su conjunto, separada por su origen inmigratorio de las tradiciones federal democráticas del siglo XIX fijada empíricamente en condiciones transitorias que ya empezaban a deteriorarse en el momento de su esplendor [...] esta coalición de clases sirvió más a la oligarquía de lo que la combatió. [...] Aunque aquel apogeo ya es cosa del pasado, la persistencia de sus efectos en el campo de la superestructura no puede subestimarse. Fuera del hecho de que la oligarquía no puede modificar su conciencia tradicional sin condenarse, ello se debe a que en los referidos sectores populares se produce una remisión inconsciente a una edad dorada en que el librecambio les aseguraba holgura y “status”. El viejo optimismo agropecuario [...] se sobrevive como prestigio intangible de los tabúes del pensamiento cipayo, como remisión a una nostálgica “edad dorada” y como sorda y astuta resistencia a todo replanteo nacional.”

Estos párrafos permiten comprender la magnitud de las fuerzas que enfrentó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 y que enfrenta Alberto Fernández actualmente. A pesar de las sucesivas crisis económicas y los quebrantos del país

a la salida de cada ciclo de gobiernos oligárquicos, por ejemplo el que va desde 1976 hasta 2001, la oligarquía consigue agrupar fuerzas en torno a la idea de que “el campo” es el motor económico del país, y moviliza a importantes fracciones de sectores populares que, aún en contra de sus propios intereses, la apoyan en su lucha contra los programas industrializadores. Así se explica el apoyo de las clases medias urbanas y rurales a la Mesa de Enlace de 2008, y las movilizaciones, desafiando además el aislamiento preventivo ante la pandemia de COVID-19, en contra de la intervención estatal en Vicentin.

Sin embargo, esta vez el movimiento nacional tiene ante sí la posibilidad de salir victorioso, si logra quebrar el “Frente librecambista” de clases, como lo llamó Spilimbergo. Para ello debe romper las bases materiales de sustentación de ese frente dirigido por la oligarquía. Se hace evidente que esta no puede ofrecerle un futuro a la pequeña burguesía rural agrupada en torno a la Federación Agraria. De modo que si asocia a los chacareros al directorio de una Vicentin conducida decisivamente por el Estado, ganará una batalla estratégica en la disputa por la renta diferencial monopolizada por la oligarquía. Un control de la producción de granos ayudaría a controlar la inflación y a inyectar dinero en el mercado interno, pasos necesarios para ganar a importantes sectores de la clase media urbana. Así, por primera vez en muchas décadas, habrá espacio para discutir el predominio material y mental de la oligarquía. Ésta es consciente de esa posibilidad, y en consecuencia ya moviliza a todas sus fuerzas, económicas, sociales y mediáticas, para abortar el intento.



# EMPRESA NACIONAL PRODUCTORA, INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS

## ● 2DA PARTE

por Jacinto Paz

En junio de 2010 sosteníamos que el Bicentenario exigía que nuestro pueblo completara la Revolución de Mayo creando una “Corporación de Empresas Agropecuarias y Agroindustriales del Estado”. El caso Vicentín revela hasta dónde está vigente esa propuesta.

Nuestro país destina 40 millones de hectáreas (ha) para producir granos, cereales y oleaginosas. La cosecha 2019-2020 fue de 150 millones de toneladas (t). Gran parte de los granos y derivados (aceites, harinas, etc.) se exportan desde los puertos privatizados por el menemismo, antecedente inmediato del macrismo.

Puertos como el de Rosario, San Lorenzo, San Martín, sobre la Hidrovía Paraná, y propiedad de privatizadas nacionales (AGD, Vicentín, o CA) y multinacionales (Cargill, Bunge, Dreyfus, COFCO, Glencore, Nidera, ADM) declararon en 2018 que habían exportado 69,2 millones de toneladas, y declararon ganancias conjuntas de u\$s 9.000 millones.

En la década del 90 se dio la llamada “revolución verde” con la implantación creciente de soja transgénica en un paquete que incluía también la aplicación de herbicidas basados en el glifosato. Si bien la productividad del suelo aumentó, el descuido del recurso y el carácter minero de las grandes explota-



ciones los empobrece muchas veces en nutrientes, y la aplicación desregulada de agroquímicos contamina tanto a las superficies como a quienes viven en ellas (incluidos hasta barrios periféricos de la ciudad de Córdoba). La reposición de fertilidad es insuficiente. El récord histórico de 4,6 millones de toneladas de fertilizantes de 2019 apenas si cubre un 48% de lo necesario.

Las grandes extensiones requeridas hacen que los propietarios de pequeñas y medianas parcelas prefieran no trabajar en ellas sino alquilarlas a grandes inversores ("pools" de siembra). Las labores agrícolas, a su vez, las llevan a cabo contratistas itinerantes, que van recorriendo la región pampeana en caravanas trashumantes al ritmo de las necesidades de siembra, cuidado y cosecha.

Pero la mayor parte de las tierras, sin dejar de estar integrada a este circuito, está en manos, mayoritariamente, de alrededor de 2.000 familias que a su vez integran el negocio especulativo y comercial de los consorcios y pools, dedican buena parte de su capital a la timba financiera, y no dejan de tener parte de las agroexportadoras locales. La renta total se concentra y abastece ante todo al núcleo central de la oligarquía nativa que tiene la supremacía económica social y política de la Argentina.

Es el poder de esa oligarquía, entreverada también con los grandes bancos y las financieras que operan en el país, la que impide realizar en el sector agropecuario pampeano las transformaciones necesarias en beneficio de la nación y el pueblo argentino.

Como vemos en el caso de Vicentin, ni siquiera en presencia de un escandaloso fraude contra el patrimonio de miles de privados y de los grandes bancos estatales dejan de poner trabas gobernadores, diputados y senadores provinciales y nacionales.

Son verdaderos encubridores del negocio privado, que en última instancia consiste en aprovechar la gran fertilidad natural de la tierra pampeana y su proximidad a los puertos para adquirir dólares. La revolución verde, en estas manos, es simplemente revolución verde dólar.

Las grandes empresas privadas practican y alientan el comportamiento rentístico, la sobre y subfacturación, la falsa exportación por Uruguay o Paraguay, la evasión, elusión y fuga de capitales, y múltiples funcionarios (especialmente a partir del sórdido cuatrienio macrista) trabajan más para ellos que para el país.

Esta oligarquía y las grandes empresas tienen en propiedad casi exclusiva la renta agraria del prin-

cipal producto exportable del país, la masa de capitales que resulta del trabajo argentino y de la fertilidad de sus praderas. La capturan y la envían a guaridas fiscales, debilitan las cuentas nacionales y extorsionan permanentemente a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de toda nuestra patria.

Lo muestran los más de 100 mil millones de dólares blanqueados durante el gobierno de Macri y que siguen en paraísos fiscales. Además, como si fuera poco saqueo, el pueblo argentino paga sus alimentos a valor dólar, y eso los hace inalcanzables para miles de familias sumidas en la pobreza que hoy alcanza al 40% de la población.

Necesitamos urgentemente una herramienta que, en manos del Estado nacional, desarrolle la región pampeana y las demás regiones del país, industrializando la producción in situ, y que empiece a capitalizarlo con producción estatal en todos los rubros del negocio agropecuario, así como en el manejo de los puertos, que necesitamos reincorporar al patrimonio estatal para asegurarnos la adecuada percepción de los aranceles aduaneros correspondientes.

De crearse esta gran empresa agropecuaria estatal, se rompería el monopolio de la generación de trabajo, hoy en manos del sector privado. Y también el manejo del mercado externo y su consecuencia: la desestabilización cambiaria permanente.

La empresa nacional productora de alimentos no tendría por objeto la rentabilidad sino el beneficio de los productores y consumidores con una reinversión permanente de utilidades para quitarle definitivamente la fuente del poder a los sectores hoy dominantes de la Argentina. En su composición societaria tendrán lugar preferencial los pequeños y medianos propietarios de tierras con vocación productiva, lo harán los trabajadores en los términos (nunca cumplidos) del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y las provincias que se incorporen. En esta gran empresa tendrán su lugar también representantes de los ministerios y organismos técnico-científicos del Estado, que intervendrán en la investigación, el apoyo técnico y control de la sanidad de la producción agroindustrial.

Todo este conjunto, armónicamente, integrará la conducción de una empresa donde el estado nacional tendrá la mayoría accionaria para asegurarse la dirección política estratégica de la misma y ser el eje de una corporación de empresas alimentarias actuales o futuras que deseen integrarse a la misma.

# NAVILLI, EL VICENTIN CORDOBÉS

por aurelio argañaraz - cordoba



Con el escándalo Vicentin ocupando a pleno el espacio de los medios pasa desapercibido otro menor, pero igualmente serio, en el renglón alimenticio: el grupo Navilli, reconocido particularmente como el Molino Cañuelas y oriundo de Laboulaye, parece marchar al concurso de acreedores, con una deuda también millonaria y centrada en los bancos nacionales e internacionales: 1.400 millones de dólares es el pasivo que se atribuye al grupo, que cuenta entre sus acreedores al Banco Nación. En este caso, el principal banco del Estado, durante la gestión de Mauricio Macri, le prestó a Navilli 7.000 millones de pesos; con el Banco de Córdoba también comprometido en 600 millones de pesos, ambas deudas están en situación 4 (alto riesgo de insolvencia) y 5 (irrecuperable), según la norma del Banco Central.

Aunque no alcanza las dimensiones de Vicentin, el grupo Navilli –propietario del Molino Cañuelas y la Compañía Argentina de Granos (CAG)– es gigante en el comercio agrícola, con la CAG, y un actor mayor en la producción de harina, galletas, pan y aceites. Basta con señalar que industrializa el 30% del trigo procesado en el mercado interno, es el principal exportador de harina y emplea a 3000 trabajadores, para tener una medida de la magnitud del grupo.

Como ocurrió con Vicentin, existan o no maniobras delincuenciales, la situación de Navilli se complicó con Macri, sus devaluaciones, el auge de la especulación financiera y el estrechamiento del mercado, ya que hasta los productos que usan harinas sufrieron la caída del consumo popular. Ese es, sin duda, un aspecto de la cuestión, íntimamente ligado a que estas firmas creyeron en el rumbo que estaba siguiendo “el mejor equipo del último medio siglo”. Su conducción, enfeudada ideológicamente, como todo el empresariado, a las gestiones imperialistas que los conducen a la ruina, desoyó los consejos de

la Banca Morgan, que curiosamente la prevenían sobre los riesgos de endeudarse. Por su parte, el macrismo ofrecía –en el caso Vicentin lo investiga la Justicia y una comisión parlamentaria bicameral– a las grandes empresas un crédito generoso, negado a las pymes. Desatendía, así, normas elementales del crédito bancario, concentrándolo en un puñado de clientes. Es claro que estábamos en “el mundo del revés”.

O no, quizás, si nuestras sospechas fuesen acertadas: presumiblemente, haciendo abstracción de otras turbiedades, quisieron llevar a la banca oficial a una situación de quebranto que exigiera su liquidación y dejara el crédito y los servicios financieros –ya López Murphy intentó privatizar al Banco de la Nación en el gobierno de la Alianza– en manos privadas, preferentemente extranjeras ¿Cómo explicar, de lo contrario, que tres grupos empresarios –debe agregarse a los anteriores Pescarmona, también morosa en 3000 millones de pesos– hayan recibido prestamos que representan casi un tercio del patrimonio neto de la entidad, burlando incluso al Banco Central, con información falsa, para evitar toda posible traba a esos otorgamientos?

Se avecina un drama. Para la ciudad de Laboulaye, el Molino Cañuelas es tan vital como Vicentin en el caso de la ciudad de Avellaneda. Se trata, aquí también, de una empresa nacida en la década del 30, que ha sobrevivido a muchas de las catástrofes padecidas por el país. Su quebranto, muy presumible, pese a que se encuentra hoy trabajando, nos da la medida de la calamidad nacional que representó Macri y sus secuaces de la UCR y la Coalición Cívica. En el caso de los radicales –una fuerza otrora invencible en el sur cordobés– la responsabilidad de Negri, Aguad y Mestre acentuará la pérdida de relaciones de esa fuerza con su electorado tradicional y la decadencia irreversible del viejo partido.



Como parte de las medidas que el Estado tendrá que afrontar en la postpandemia, el ex vicepresidente Amado Boudou propuso la implementación del **Ingreso Femenino Estructural** de carácter permanente, en un artículo publicado en *El Destape* el 27 de junio titulado: “Ingreso Universal: un sendero a la igualdad”.

La iniciativa busca ampliar el universo de cobertura social hacia el trabajo doméstico, para acercarnos a una **Renta Universal**. Esta medida complementa la Jubilación de Ama de Casa y la AUH, que vienen demostrando sus beneficios económicos y sociales desde los Gobiernos kirchneristas.

Amado Boudou y Pablo Fontdevilla proponen en el citado artículo, “*aprovechar la coyuntura desfavorable para tomar una medida de carácter estructural*” y crear un “**fondo de igualdad de género**”. El mismo provendría de aumentar la alícuota del Impuesto a las Ganancias, gravar la renta financiera y una alícuota adicional sobre las retenciones a las exportaciones primarias.

Los autores sustentan la viabilidad de la medida, en el amplio nivel de adhesión y movilización con que cuenta el feminismo, el apoyo del Vaticano y las posiciones del Papa Francisco favorables a políticas de Renta Universal. De esta manera, además de sumar las fuerzas entre sectores que difieren en otros asuntos, se aprovecharía el potencial del feminismo para volcarse a la lucha por la redistribución del ingreso y ampliar el alcance del Movimiento sobre las necesidades apremiantes de la mayoría de las mujeres.

La brecha salarial entre mujeres y hombres ronda aproximadamente en un 27%. Las mujeres entraron al mercado laboral cargando además las tareas del hogar. El hombre, si bien empezó a aumentar su participación en lo doméstico, no lo hizo al mismo ritmo. Las mujeres destinan un promedio de 6,4 horas diarias a esas actividades y los varones 3,4. De allí se desprende que hay una brecha salarial que vuelve a las mujeres más pobres que a los varones: *porque trabajan tres horas más por día, gratis*.

Esto explica también el techo de cristal y la mayor precariedad laboral en el universo femenino. No hay suficiente provisión de servicios públicos de cuidados, y para acceder a los mismos, hay que pagar o emplear a otras mujeres en pésimas condiciones.

El capitalismo, aún en sus años industriales florecientes, nunca tuvo necesidad de pagar por el trabajo doméstico. Los dueños de las fábricas aseguran la reproducción de sus trabajadores con el salario sobre la producción de bienes o servicios. Solo el Estado puede reparar estas asimetrías y allanar el camino hacia una mejor distribución del ingreso entre hogares integrados por personas de distinto género.

De la misma manera en que el Estado debe garantizar el acceso a la salud y a la educación, también es el único actor capaz de solventar las tareas de cuidado y reproducción, que les han sido asignadas a las mujeres y que nunca han sido remuneradas, usando como pretexto el rol biológico y –extorsivamente- hasta el “amor”. (¿Solo las mujeres tienen ese sentimiento y deben aceptar mansamente esta explotación adicional?)

Hay voces divergentes dentro del feminismo en cuanto a la necesidad de asalariar las tareas domésticas en el ámbito privado. Sus posiciones se basan en que esto llevaría a perpetuar la imposición cultural sobre el rol de la mujer, impidiendo que dichas labores se repartan equitativamente por género.

Desde **Patria y Pueblo Socialistas de la Izquierda Nacional** consideramos que la medida tendría un enorme potencial como herramienta de reactivación económica, al tiempo de saldar las desigualdades redistributivas y de género. El impacto en la vida de las mujeres será beneficioso, al mejorar su condición de inferioridad respecto al trabajo precarizado y respecto al hombre en el ámbito doméstico privado. Apoyamos la propuesta y alentamos a las mujeres argentinas y al Movimiento Feminista a tomarla como propia y batallar para lograr su concreción.



## CIUDAD DE POBRES CORAZONES

Con la pandemia del Covid-19 el gobierno porteño ingresó en una fase ascendente de denuncias públicas sobre su gestión. Este hecho ya de por sí merecería un análisis minucioso sobre cómo se logró fisurar el cono del silencio construido por propios y ajenos sobre el gobierno PRO. Pero lo urgente remite señalar cuáles son los reclamos que evidenciaron la destrucción plena del Estado capitalino.

Las denuncias de mayor alcance pueden resumirse en la escasez de equipamiento y recursos humanos en el sistema sanitario y la precarización en las condiciones de hábitat. A las que se suman la insuficiente inversión para disminuir la desigualdad digital en el campo educativo y la nula implementación de líneas de ayuda económica directa para PyMES y comercios.

### Respuestas Express

Fiel a un estilo de gobierno implantado por Mauricio Macri, la administración porteña al mando de Rodríguez Larreta y Santilli salió rápidamente a buscar una solución para el sistema de salud: compró barbijos N95 vencidos y con un sobrepeso cercano a los 210 millones de pesos.

Buscando superarse habilitaron el running a solo 10 días de conocerse el aumento exponencial de contagios de coronavirus que se estaba desarrollando en las villas de emergencia donde habitan 168 mil personas (5,7% de la población local) según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina dependiente a la UCA.

Como si estas barriadas correspondiesen a otro distrito, el “equipo” porteño liberó la actividad deportiva haciendo oídos sordos a la advertencia de los especialistas sobre la simetría entre los aumentos de casos en las villas y el ascenso de la curva de contagio en toda la ciudad y el impacto inevitable en el sistema de salud.

La persistencia en la decisión finalmente rindió sus frutos. El tema “runners” se instaló en la agenda mediática. De conocer cómo se gastaron millones de pesos del Banco Mundial y del BID para urbanizar la villa 31, donde jamás se realizó la conexión de agua potable, pasamos a escuchar a los *expertos en nada* sobre la relación entre la angustia y el trote.

Con respecto a la falta de equipamiento y conectividad escolar, la respuesta gubernamental



no se hizo esperar. Los abogados PRO recusaron al juez Roberto A. Gallardo al minuto de conocer la medida cautelar dispuesta por el magistrado ante el amparo presentado por el gremio de la UTE junto a la Asesoría Tutelar, el Ministerio Público de la Defensa y otras instituciones porteñas con el objetivo de que el gobierno garantizase la continuidad pedagógica.

La apertura de comercios sin ningún control ni operativo de prevención completó la saga de decisiones desafortunadas en el marco de la pandemia. Es innegable el perjuicio económico que la actividad comercial y productiva enfrenta. Pero es a través de un mayúsculo esfuerzo fiscal de las arcas de la ciudad más rica del país donde debe buscarse el alivio y no a costa de infectar a la población.

### **Horacio y Diego no están solos**

Especial mención merece la bochornosa e irresponsable conducta de las senadoras y senadores del Pro, la UCR y ramificaciones antipopulares al retirarse de la sesión virtual que daría tratamiento a la ley de alquileres que contaba con media sanción desde noviembre de 2019.

Legislación que beneficia a la par de la conquistada en la Ciudad al 35,2% de los hogares porteños que son inquilinos, porcentaje que representa 420 mil hogares donde habitan un millón de ciudadanos de acuerdo a los datos de 2019 de la Encuesta Anual de Hogares de la Dirección General de Estadísticas y Censos local.

Dato sensible que paso por alto Martin Lousteau, primer candidato porteño a senador de Juntos por el Cambio y actual vicepresidente de la Cámara, al abandonar el recinto argumentando que el proyecto de ley de alquileres no comprendía los temas a tratar relacionados al Covid-19. No cabe duda que “Guga” Lousteau no comprende siquiera la realidad de los ciudadanos que dice representar.

De este modo, llegamos a la fase más crítica de la pandemia. De forma abrupta y dolorosa se expusieron en la ciudad todas las desigualdades sociales, laborales y económicas que genera un proyecto político que aborrece de los ciudadanos que debe cuidar. Solo resta de ahora en más decidir si permitiremos que el PRO y sus aliados continúen dándonos la espalda.

## **EL DESGUACE DEL SISTEMA DE SALUD PORTEÑO**

Un informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria señala que durante la primera década de gobierno del PRO “la cantidad de camas disponibles en los hospitales de CABA se redujo. El promedio en los 29 hospitales de la ciudad era 7549,7 en 2007 mientras que en 2017, contó con 563,7 camas menos. Para ilustrarlo más claramente: ese descenso en el número de camas equivale al cierre de los dos hospitales pediátricos (el Gutiérrez y el Elizalde).”

Y si de cierre de hospitales hablamos, Rodríguez Larreta busco hacerlo efectivo cuando impulsó en 2018 el proyecto “Complejo Hospitalario Sur”, el cual proponía la venta de los edificios de los hospitales Marie Curie (oncología), Ferrer (rehabilitación respiratoria), Udaondo (gastroenterología) y el IREP (rehabilitación psicofísica) unificando estas especialidades médicas en un solo predio, el hospital Muñiz (oncología). Nosocomio que vería reducida su infraestructura, la cantidad de atención de pacientes, el servicio de guardia y los espacios para investigación.

El avance en la precarización del sistema sanitario dio un paso más cuando fines de 2018 a través de la ley nro. 6035 se dispuso que los enfermeros continuaban siendo parte del plantel técnico administrativo negándoles así ser reconocidos como profesionales de la salud. Ironía de la historia.

Fueron los residentes y concurrentes quienes escaparon de la guadaña precarizadora PRO aunque no a su feroz represión. Hace apenas 7 meses Rodríguez Larreta enviaba un proyecto de ley que atentaba contra sus derechos laborales más básicos: las horas de trabajo semanales, el salario, las licencias y los francos postguardia, entre otros.

Con la aparición del Covid-19 las exigencias por entrega de elementos de protección e higiene, aumento de personal y protocolos claros sobre las tareas laborales del sector fueron en aumento. Comenzaron cuando el nuevo coronavirus se cobró la primera víctima luego de dos días de internación en el Hospital Argerich.

El 10 de marzo el doctor Roberto Veneroni, uno de los jefes de guardia del nosocomio, informó a las autoridades que su sector se encontraba en “colapso operativo” con lo cual se solicitaba que el SAME y PAMI desistiera de enviar nuevos pacientes. Importante resaltar que el 54,2% de la población porteña mayor de 60 años se encuentra afiliada al INSSJyP según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de CABA. Referencia adicional: el 18,7% de los habitantes de la ciudad no poseen otra cobertura que el sistema público.

Tres meses después de la misiva cursada por el Dr. Veneroni un comunicado emitido por trabajadoras y trabajadores residentes y concurrentes del Argerich continuaba exigiendo la incorporación de “personal suplementario” debido al aumento de la carga horaria por aislamiento obligatorio de otros profesionales.

Mismo reclamo lo realizó hace escasos días Héctor Ortiz, enfermero y delegado de ATE en el Durand, con el agravante de lamentar el fallecimiento de dos trabajadores de la salud por Covid-19.

Al 29 de junio se encuentran ocupadas 227 camas de terapia intensiva de las 400 destinadas a pacientes con coronavirus. Los casos positivos ascienden a 26.359. Y aun el gobierno porteño no cumplió con lo dispuesto por la Justicia de testear a los trabajadores de los nosocomios con alto índice de contagios.

## SERÁ JUSTICIA

La caída del clan Macri, que recién está iniciándose en los estrados judiciales, empieza a exhibir el carácter mafioso y policíaco del proyecto imperialista en la República Argentina.

Empieza a salir a luz la perversidad de un presidente y un grupo de empresarios que, a poco que avancen las causas, empezarán a presentar un inocultable parecido con el señor Arquímedes Puccio.

Sin embargo, sería un gravísimo error suponer que aquí termina la cuestión y con el eventual resultado lapidario de las causas en curso se haya hecho justicia.

Ni los juicios a las Juntas, ni su posterior ampliación a los perpetradores del genocidio de 1976, pudieron impedir la caída de la Argentina en la trampa fatal tendida por Martínez de Hoz, la oligarquía y el imperialismo contra nuestro desarrollo autónomo, latinoamericano y autocentrado el 24 de marzo de ese año.

Mientras caigan solamente los sicarios, uniformados o de civil, nuestros problemas seguirán profundizándose por más que tengamos –como seguramente tendremos en el período abierto en las presidenciales de 2019- períodos de crecimiento y redistribución de la riqueza.

Solamente cuando nacionalicemos las privatizadas, expropiemos a los grandes propietarios de tierras pampeanas y pongamos en manos públicas la banca y la finanza podrá la inmensa masa de los argentinos respirar aliviada y lanzarse a la aventura de construir una Patria rica, inclusiva y digna.

Esto no es más que un bienvenido prólogo. La tarea es larga y el camino difícil.



**REGALA  
LIBROS**

Editorial Publicaciones DEL SUR  
Bolívar 1511 CABA Argentina  